

Otro patrón de desarrollo económico

Al inicio del siglo XX, México era una nación esencialmente rural; su principal actividad económica se ubicaba en el sector primario y estaba integrada básicamente por economías regionales autosustentables y relativamente autónomas.

A partir de la segunda guerra mundial, se implantó en el país un nuevo esquema de desarrollo, supuestamente para modernizarlo y para mejorar las condiciones de vida de la población, en su mayoría de campesinos. El proyecto estuvo orientado a instaurar un esquema de industrialización similar al seguido por las naciones europeas durante los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX, que permitiría generar un gran número de empleos y que de país productor y exportador de materias primas convertiría a México en productor de manufacturas mediante una industria propia.

Algunos de estos objetivos se fueron cubriendo entre 1950 y 1976, con una secuela de mejoría social insuficiente y un alto crecimiento de expectativas, pero sus efectos secundarios resultaron desastrosos, hecho por demás previsible luego de las experiencias europeas de siglos y decenios anteriores.

Este esquema de desarrollo impulsó la concentración de la población. Así se formaron los grandes conglomerados urbanos actuales, caracterizados por un crecimiento caótico ante la incapacidad gubernamental para establecer y vigilar el cumplimiento de planes y normas de desarrollo urbano, así como para crear los empleos y servicios públicos que la población requería. La focalización de la actividad económica en unos cuantos centros urbanos llevó a la disolución de la mayor parte de los sistemas económicos regionales autosustentables, e imposibilitó el surgimiento de otros. Al mismo tiempo, se produjo la concentración creciente de la riqueza económica en una minoría privilegiada, estrechamente vinculada con los intereses transnacionales y con el poder político.

Otra de las consecuencias fue la destrucción irracional de recursos naturales --principalmente los renovables, como los bosques y selvas--, para alimentar de materias primas a las industrias mineras y manufactureras, con la correlativa alteración extrema del medio ambiente, comenzando por las zonas cercanas a las ciudades, por la contaminación del agua, el suelo y la atmósfera con desechos biológicos e industriales.

La descomposición de las formas campesinas de producción que ocasionó el patrón de crecimiento económico, condujo a la pérdida de la capacidad para la autosuficiencia alimentaria y a la creciente importación de alimentos. El relativo equilibrio económico existente entre las diferentes regiones del país quedó trastocado y generó diferencias económicas y sociales crecientes entre ellas y al interior de ellas.

El resultado general fue un empobrecimiento creciente de la población, así como un incremento inusitado de la migración --a las grandes ciudades y a Estados Unidos-- y de la economía informal.

Al terminar el siglo XX, este esquema de desarrollo había generado un país donde más de 60% de la población se concentraba en 150 municipios (7% del total), mismos que generaban más del 80% de la producción no agrícola y concentraban el 85% de las inversiones. Al mismo tiempo, la industria instalada sólo parcialmente tenía sello nacional: hoy, en el 95% de los casos, las grandes empresas establecidas en el país son extranjeras, incluidas las del sector financiero, con una oferta total de empleo menor al 40%, lo cual ha tenido como consecuencia que la economía informal ocupe a más de la mitad de la población económicamente activa.

La transformación de las formas de producción y el surgimiento de las llamadas *sociedades postindustriales* dominadas por el sector terciario, a lo largo de los años 80, dio lugar al establecimiento de un nuevo esquema de dominación económica, el **patrón neoliberal de acumulación a escala global**, mediante el cual las naciones más desarrolladas, en combinación con sus empresas, han logrado imponer su control sobre los mercados financieros y económicos, generando mayores desequilibrios nacionales y nuevos fenómenos de empobrecimiento y concentración de la riqueza, con la colaboración disciplinada y sumisa de gobiernos como los que ha padecido el país durante los últimos 20 años.

En las últimas dos décadas, la antigua estructura de desarrollo industrial, sobre todo en su segmento de micro, pequeña y mediana empresa, ha sido golpeada seriamente por la apertura comercial indiscriminada y la eliminación de las políticas estatales de fomento; la única innovación ha sido el establecimiento de plantas maquiladoras y ensambladuras --una de las variantes industriales más primitivas y desquiciantes--, que hoy también se encuentran en crisis. Los sectores de servicios, incluyendo el turismo, el comercio, las comunicaciones, las finanzas y el ejercicio profesional independiente, han sido deformados y en su mayor parte entregados al capital extranjero.

A las viejas deficiencias del esquema de industrialización y concentración urbana, se han agregado otras igualmente destructivas en el largo plazo: la reducción de la participación gubernamental del 40% al 15% del PIB; el incremento de las exportaciones sin importar que el valor agregado de origen nacional sea mínimo; la desprotección total de la producción nacional, sobre todo

la agropecuaria; la reducción significativa de las inversiones públicas en infraestructura para las comunicaciones, el transporte, la salud y la educación, crecientemente privatizadas; y el debilitamiento de la cohesión y la cultura nacional.

El paliativo al problema de desempleo a través de maquiladoras ha constituido una estrategia de alto riesgo pues con la misma facilidad con la que los empleos se crean, son destruidos o desaparecidos. La estrategia no crea ventajas competitivas, elemento central de los proyectos de desarrollo de las economías avanzadas.

Anualmente, cientos de miles de mexicanos emigran legal o ilegalmente a Estados Unidos, para obtener el trabajo y los ingresos que no encuentran en sus regiones de origen. Los migrantes arriesgan su salud y vida en el tránsito, son esquilmados por los *polleros*, sufren la opresión, represión, exclusión y sobreexplotación aplicada por la policía de migración, los contratistas y los xenófobos nortños. Allá no se les reconocen derechos civiles ni sociales, ni pueden ejercer los que tienen como mexicanos.

Pero las remesas enviadas por los migrantes, que en 2004 superaron los 15 mil millones de dólares --convirtiéndose en una de las mayores fuentes de divisas de México--, sostienen a núcleos extensos de la población rural y urbana mexicana, introduciendo en ella patrones de consumo distintos a los originarios y minando las identidades culturales. Alimentan en divisas el proceso de acumulación, pero no sirven en la mayoría de los casos para generar ahorro y actividades económicas sustentables para el empleo y la subsistencia de las familias de migrantes.

De esta manera México es cada día menos el país que necesitamos y anhelamos, y más el que otros quieren que sea: uno con mano de obra barata para la producción de sus manufacturas, en el territorio mexicano o en el de Estados Unidos, y un mercado complementario pero importante para sus productos y servicios.

Por lo anterior, proponemos un **cambio estructural del patrón de desarrollo económico**, como columna fundamental de un nuevo proyecto de nación. Los aspectos más relevantes de este nuevo patrón de desarrollo económico se derivan naturalmente del diagnóstico anterior.

La recuperación e incorporación de las zonas rurales al desarrollo nacional, mediante la **reconstrucción gradual de las economías regionales** como economías sustentables y equilibradas, y la ejecución de proyectos que consoliden ventajas competitivas a través de cadenas integradas de valor agregado.

La reestructuración e impulso al sector agropecuario, para alcanzar la soberanía alimentaria mediante programas de crédito, subsidios e incentivos a la producción agrícola, ganadera y forestal, y el establecimiento de esquemas de distribución de sus productos que los liberen de intermediaciones

expoliadoras, hasta lograr el equilibrio e incluso ventajas competitivas en el mercado interior y en el exterior.

El diseño y promoción pública, privada y comunitaria de una política de largo plazo de fomento a la artesanía, la manufactura y la gran industria, sustentada en los recursos y factores productivos, ventajas comparativas y competitivas existentes en el país y sus regiones, crecientemente integrada en los ámbitos regionales y el nacional, orientada en primer lugar a la satisfacción de las necesidades del mercado interno --como base para el esfuerzo exportador--, tecnológica, ambiental y socialmente sustentable, creadora de empleo estable y bien remunerado. Como parte de esta política, deben diseñarse mecanismos para que la industria maquiladora de exportación se integre crecientemente en la estructura productiva local, regional y nacional.

El fortalecimiento del sector terciario de la economía, a través de su inducción en el proceso de formación de cadenas productivas de bienes y servicios, con alto contenido intelectual, así como por la identificación y consolidación de ventajas competitivas en la industria y los servicios dando lugar a más y mejores empleos.

La conformación de esquemas locales de producción asociativa competitiva y el establecimiento de normas que estimulen la competencia, eliminando las ventajas de las grandes empresas monopólicas de origen extranjero, así como sus prácticas indebidas, impulsando la creación de empleos, adecuados y mejorando la capacidad de compra de la población.

La restitución de la capacidad del gobierno para asegurar su papel en la conducción económica del país, en la planeación y promoción real del desarrollo y en el cumplimiento de sus compromisos sociales de acuerdo con la Constitución, a través de una reforma fiscal equitativa y de la explotación patriótica, inteligente y sustentable de **nuestros recursos energéticos**.

El estímulo a los capitales privados nacionales y extranjeros para realizar inversiones que incrementen la capacidad productiva del país, el número y la productividad de los trabajadores mexicanos, así como la competitividad de la economía nacional en un marco de crecimiento económico sostenido y sustentable.

La promoción de la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, como factores fundamentales del crecimiento económico, y de la creación de empleos adecuados para quienes concluyen su formación profesional y de posgrado dentro y fuera del país. Para este fin será preciso promover que las grandes empresas del sector energético (PEMEX, CFE Y LFC) desarrollen una red de empresas proveedoras de bienes y servicios con alto contenido tecnológico, de manera que en el corto plazo comiencen a disminuir significativamente los niveles actuales de dependencia tecnológica. Es decir, se requiere que estas empresas se conviertan en el eje de una estrategia de industrialización. Adicionalmente, será necesario buscar que las dependencias del gobierno en todos

sus niveles, contraten empresas nacionales o con altos valores de integración nacional para satisfacer sus requerimientos tecnológicos, como lo hacen los países más desarrollados.

Debemos impulsar estos cambios tomando en cuenta los escenarios globales que dominan el planeta, especialmente los intereses económicos que confluyen actualmente en el ámbito nacional, con el objetivo de eliminar o reducir en lo posible riesgos de enfrentamiento que lleven a la desestabilización o al retroceso económico. El éxito dependerá fundamentalmente del apoyo popular que este proyecto obtenga.